

Hace apenas una década, los miembros de las FARC llegaban a la mesa de negociaciones con el presidente Andrés Pastrana en actitud arrogante. Lo primero que hacían era exhibir sus bien ilustrados fusiles y luego se soltaban en largos monólogos en los que reclamaban innumerables peticiones. Por aquella época, el grupo guerrillero estaba presente en los 32 departamentos del país e incluso tenían un músculo militar que le permitía tomar poblaciones enteras y llevarse a cuento agente o soldado hubiera sobrevivido a sus devastadores ataques.

La ciudadanía exhausta votó por la mano dura y eligió a Álvaro Uribe, quien no se tomó un respiro en su propósito de vencerlos militarmente. Con su Política de Seguridad Democrática, llevó la fuerza pública a 300 de los 1.100 municipios colombianos en donde la guerrilla dictaba la única Ley. A medida que iban cayendo comandantes de la guerrilla, otros eran capturados y centenares más le decían adiós a las armas y se reincorporaban a la vida civil, la gente empezó a recuperar la confianza.

Los colombianos volvieron a transitar por las carreteras y retornaron a los campos, optó por darle confianza a otros sectores políticos. En ese contexto, la economía colombiana, que bordeaba la recesión, llegó a crecer un 7,4%, por encima de la media latinoamericana (5,5%). Regresaron las inversiones y miles de personas que habían salido de Colombia, entre ellos cientos de cerebros fugados.

Al ser elegido a la presidencia en 2010, Juan Manuel Santos anunció que si bien el país iba por buen camino ahora había que esforzarse más para alcanzar el desarrollo y que esto pasaba por la reconciliación. Santos firmó una Ley de Tierras y una Ley de Víctimas, entre la ovación de los sectores más progresistas y la mirada atónita de las FARC. Además, empezó a fortalecer otras instituciones que han creado una geografía en donde la convivencia es evidente: en 400 municipios de Colombia durante este año no ha habido un solo asesinato.

En el contexto internacional, Santos se reconcilió con los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; y de Ecuador, Rafael Correa; países con los que Uribe había llegado a un alto nivel de pugnacidad, precisamente a causa de las FARC. La crisis se desató siendo Santos ministro de Defensa, a raíz del bombardeo contra el campamento de Raúl Reyes en Ecuador. Los ordenadores incautados destaparon las conexiones y la protección que las FARC tenían en ambos países.

En el terreno político, Santos invitó a todos los movimientos políticos a trabajar en conjunto en lo que se llama la unidad nacional. Igual hizo con las altas cortes y los

periodistas más críticos. Los tiempos de crispación quedaron atrás.

En este contexto, el país empezó a ver la luz al final del túnel favorecido además por un buen manejo económico. El Producto Interno Bruto (PIB) creció el año pasado un 5,9%; la inversión extranjera directa (IED) sobrepasó los 13.000 millones de dólares. “En la región, solo Colombia mantiene el dinamismo en el exterior”, dijo en su informe del año pasado la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Hay más datos para el optimismo, las exportaciones colombianas superaron los 50.000 millones de dólares en 2011, una cifra sin precedentes. Y en materia petrolera, el país se acerca a una producción de 1 millón de barriles diarios. Además, la confianza en el país hoy es enorme. «Tenemos una economía con una inflación baja y estable y unas condiciones monetarias y fiscales que muestran gran estabilidad y fortaleza», dice el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe. Como resultado de todo esto, Colombia recuperó el grado de inversión que perdió a finales de los noventa.

Sin embargo, todo esto contrasta con el atraso en especial en materia de infraestructura y en unos niveles de pobreza de los que Santos dice sentir vergüenza. Él cree que si se destinara un porcentaje de los millonarios recursos que van para la guerra, en asistencia y en obras públicas, Colombia daría un paso enorme. Eso, por ejemplo, fue lo que les dijo a los empresarios quienes le respondieron que comparten su punto de vista y le dijeron que están de acuerdo en la búsqueda de la paz negociada. Incluso le dijeron que están dispuestos a pagar un impuesto extra para apoyar el proceso y aún más en dar vocería política y acceso a cargos de elección popular a los desmovilizados, en caso de que este resulta exitoso. Además de los empresarios, Santos cuenta hoy con un clima favorable a la negociación en vastos sectores de la opinión pública. El nuevo país quiere apostarle al futuro y dejar atrás los 50 años de guerra. Claro que la realidad es tozuda y dura. Falta ver que dicen ahora las FARC, las viejas FARC.

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/28/actualidad/1346181319_566979.html